

MEMORIA EJECUTIVA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE LEY OMNIBUS (RESPECTO A LA LEY 2/2002 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID)

FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO

Consejería/Órgano proponente	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura	Fecha inicial	
Título de la norma	LEY OMNIBUS (RESPECTO A LA LEY 2/2002 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID)		
Tipo de Memoria	<input type="checkbox"/> Extendida <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutiva		
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA			
Situación que se regula	<p>Con la publicación de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, quedo derogada la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, a excepción del Título IV, «Evaluación ambiental de actividades», los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el Anexo Quinto.</p> <p>Además, a partir de ese año, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental pasó a ser la única norma en la materia de aplicación en la Comunidad de Madrid.</p> <p>Por esta circunstancia se han venido detectando algunos vacíos legales que se trata ahora de corregir. Así, se propone una modificación de la redacción del epígrafe 11 del Anexo V, referido a la evaluación ambiental de actividades, de competencia municipal, de la Ley 2/2002, de evaluación de la Comunidad de Madrid, cuya redacción actual es: <i>instalaciones de tratamiento de superficies metálicas y materiales plásticos por procedimientos electrolíticos o químicos, cuando el volumen de las cubetas destinadas al tratamiento sea igual o inferior a <u>10 metros cúbicos</u></i></p> <p>Debido a que actualmente las instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materiales plásticos por proceso electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a <u>30 metros cúbicos</u> está sometido a procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental, al encontrarse en el Anexo I de la Ley 21/2013 y las inferiores a 10 metros cúbicos, como se ha mencionado, a la evaluación ambiental de actividades</p>		



establecida en la Ley 2/2002, a las instalaciones entre 10 y 30 metros cúbicos no les resulta de aplicación ningún procedimiento ambiental, a pesar de ser instalaciones contaminantes.

Por otro lado, se propone la eliminación del epígrafe 6 del anexo V correspondiente a *Industrias de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, no incluidas en otros epígrafes*, a fin de conseguir una mayor claridad y simplificación administrativa debido a la mínima incidencia de estas industrias en la Comunidad de Madrid, existiendo una sola planta envasadora según datos de la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE) y, por otra parte, estar sometida a regulación estatal por el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.

Asimismo, se propone la eliminación del epígrafe 16 del mismo Anexo V, *instalaciones base de telecomunicación que operen con radiofrecuencias*, con objeto de conseguir una mayor claridad y simplificación administrativa, ya que las instalaciones de telecomunicaciones (antenas) son instalaciones que desde el punto de vista técnico-ambiental no generan un impacto ambiental significativo, y que, además, fuera de zonas urbanas no se encuentran sometidas a ningún procedimiento ambiental (salvo, en su caso, en espacios protegidos).

Con referencia al epígrafe 22 del mencionado anexo, *Instalaciones en las que se realicen prácticas de embalsamamiento y tanatopraxia*, se propone la eliminación del mismo ya que las instalaciones de este tipo vienen reguladas por los Decretos 2263/1974, de 20 de julio, y 124/1997, de 9 de octubre, por los que se aprueban los Reglamentos de Policía Sanitaria Mortuoria del Estado y de la Comunidad de Madrid, en los que se expone que las causas de mortalidad, los usos y costumbres en torno a la muerte, las formas de vida, el avance en técnicas constructivas, y el servicio que prestan las empresas funerarias han variado sensiblemente, por lo que alguno de los controles administrativo-sanitarios que se realizaban no tienen justificación ni por riesgos sanitarios, ni por una demanda de la sociedad. Por otra parte, en lo tocante a aspectos de calidad del aire o residuos, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la CAM, define la comprobación de las instalaciones con carácter previo a la resolución de autorización de establecimiento de las mismas. Es, por lo tanto, otra propuesta para mejora de regulación normativa por simplificación de la misma.



	<p>De la misma forma, con esta propuesta se pretende eliminar el epígrafe 23 del citado Anexo V, referente a <i>centros sanitarios asistenciales, extrahospitalarios, clínicas veterinarias, médicas, odontológicas y similares</i>. El impacto medioambiental que pueden producir los residuos generados en estos centros viene precedido por el establecimiento de los requisitos mínimos exigibles en la producción y gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos regulados en el Decreto 83/1999, de 3 de junio, cuyo ámbito objetivo es prevenir los riesgos que dichas actividades generan, tanto para las personas directamente expuestas a los residuos en dichos centros, como para el medio ambiente, ofreciendo esta normativa las garantías suficientes para su protección, siendo innecesaria la evaluación ambiental.</p> <p>Por último, se propone la eliminación del epígrafe 24 del Anexo V, sobre <i>Laboratorios de análisis clínicos</i>, remitiéndonos igualmente al Decreto 83/1999, de 3 de junio, citado en el epígrafe anterior, así como al Real Decreto 2043/1994 sobre inspección y verificación de buenas prácticas de laboratorios, que regula la inspección y verificación de los sistemas de organización y de las condiciones de planificación, realización, registro y difusión de los estudios de laboratorios para ensayos no clínicos efectuados con fines reglamentarios, de productos farmacéuticos, cosméticos, aditivos alimentarios, aditivos para piensos, plaguicidas y demás productos químicos con el objeto de determinar sus efectos en las personas, los animales y minimizar la contaminación del medio ambiente, estableciendo órganos de control que determinen el grado de cumplimiento de la buenas prácticas en los laboratorios, prescindiendo, como en los epígrafes anteriores propuestos a eliminar, de la evaluación ambiental, con la consiguiente simplificación administrativa.</p>
Objetivos que se persiguen	La mejora técnica, a la vista de las anomalías detectadas, de supuestos recogidos en el Anexo V de la Ley 2/2002, de evaluación de la Comunidad de Madrid, modificando la redacción de un epígrafe y eliminando aquellos en los que no se considera necesaria la evaluación ambiental, lo que facilitará en ese campo las inversiones y la actividad económica.
Principales alternativas consideradas	<ul style="list-style-type: none"> - Llevar a cabo las modificaciones planteadas - No llevar a cabo ninguna modificación
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO	
Tipo de norma	Ley



<p>Estructura de la Norma</p>	<p>La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental de ámbito estatal, establece un régimen legal que afectó sustancialmente a la normativa autonómica entonces vigente, la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, dictada al amparo de la competencia que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid le atribuye en el artículo 27.7 para el desarrollo legislativo en materia de protección del medio ambiente.</p> <p>A pesar de tratarse de legislación básica, los artículos 11.2 y 11.3 de la Ley estatal permite que las comunidades autónomas modifiquen este régimen, siempre y cuando se refieran a planes, programas o proyectos competencia de las mismas. Por esto, se hizo necesaria una reformulación de las competencias en la materia en el ámbito de la Comunidad de Madrid, incluyéndose a este efecto una Disposición Transitoria Primera en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.</p> <p>Una de las motivaciones para esta reformulación fue la de garantizar la salvaguarda de valores ambientales fundamentales que, estando vinculados a proyectos que no eran tenidos en cuenta por la nueva legislación estatal, se consideró conveniente que si fueran contemplados por la legislación autonómica, entre ellos los referidos a la evaluación ambiental de actividades de competencia municipal, ya que la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece en su disposición derogatoria única la derogación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (RAMINP), aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, aunque no obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.</p> <p>Así, después de mantenerse la mencionada la evaluación ambiental de actividades, se han venido detectando algunos vacíos legales y algún exceso de regulación, que se trata ahora de corregir mediante la modificación de la redacción del epígrafe 11 y la supresión de los epígrafes 6, 16, 22, 23 y 24 del Anexo V de la ley 2/2002, para lo que está propuesta se considera imprescindible.</p>
<p>Informes a recabar</p>	<p>No procede recabar informes específicos más allá de los que se refieran a Decreto 52/ 2021, de 24 de marzo del Consejo de Gobierno:</p> <p>Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería proponente.</p> <p>Informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid</p>



Trámite de consulta y de audiencia/Información Públicas	<p>La propuesta de modificación se someterá a los siguientes trámites e informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Consulta Pública. b) Solicitud simultánea de informes preceptivos y otras consultas que se estimen convenientes. c) Trámite de audiencia e información públicas. <p>Se someterá a estos trámites de conformidad con lo dispuesto el artículo 129 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como del artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.</p> <p>En particular, se someterá a trámite de audiencia, dando traslado del proyecto normativo a las a las Entidades Locales y a la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid.</p>
ANÁLISIS DE IMPACTOS	
ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS	<p>El artículo 149.1.23, de la Constitución Española, atribuye al Estado competencia exclusiva para establecer la normativa básica en materia medio ambiente.</p> <p>El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid le atribuye, en el artículo 27.7, la competencia para el desarrollo legislativo en materia de protección del medio ambiente.</p> <p>Por otro lado, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece, en su disposición derogatoria única, la derogación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (RAMINP), aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, no obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.</p> <p>Por ello, con la publicación de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, por la que quedo derogada la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se exceptuaron de esta derogación, entre otros, el Título IV, «Evaluación ambiental de actividades», de competencia exclusivamente municipal, y el Anexo Quinto, con objeto de cumplir con lo indicado en la disposición derogatoria única de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.</p>



	<p>Por lo tanto, esta propuesta se fundamenta en la habilitación estatutaria de la Comunidad de Madrid respetando los aspectos básicos de la legislación estatal, siendo esta labor absolutamente imprescindible para la aclaración del régimen vigente de la Ley 2/2002.</p>	
IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO	Efectos sobre la economía en general	<p>Del contenido del proyecto no se deriva incidencia directa sobre la economía general.</p>
	En relación con la competencia	<p><input checked="" type="checkbox"/> La norma no tiene efectos significativos sobre la competencia.</p> <p><input type="checkbox"/> La norma tiene efectos positivos sobre la competencia.</p> <p><input type="checkbox"/> La norma tiene efectos negativos sobre la competencia.</p>
	Desde el punto de vista de las cargas administrativas	<p><input type="checkbox"/> Supone una reducción de cargas administrativas.</p> <p>Cuantificación estimada:</p> <p><input type="checkbox"/> Incorpora nuevas cargas administrativas.</p> <p>Cuantificación estimada: poner en euros €</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No afecta a las cargas administrativas.</p> <p>La aplicación de esta norma es de exclusiva competencia municipal. Para estas Administraciones se reducen cargas, con la eliminación de los epígrafes 6, 16, 22, 23 y 24 del Anexo V, así como con la modificación del epígrafe 11 de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, no se considera que pueda haber un aumento significativo de las cargas.</p>



	<p>Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma</p> <p><input type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de la Administración de la Comunidad de Madrid</p> <p>x <input checked="" type="checkbox"/> No afecta a los presupuestos de la Administración de la Comunidad de Madrid.</p>	<p><input type="checkbox"/> Implica un gasto.</p> <p>Cuantificación estimada:</p> <p><input type="checkbox"/> Implica un ingreso.</p> <p>Cuantificación estimada: de €</p>
	La norma tiene un impacto de género	<input type="checkbox"/> Negativo x Nulo <input type="checkbox"/> Positivo
	La norma tiene un impacto de familia, infancia y adolescencia	<input type="checkbox"/> Negativo x Nulo <input type="checkbox"/> Positivo
	Informe sobre su impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género	<input type="checkbox"/> Negativo x Nulo <input type="checkbox"/> Positivo
OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS	Ninguno.	
OTRAS CONSIDERACIONES	Ninguna	



MEMORIA EJECUTIVA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE LEY OMNIBUS (EN LO REFERIDO A LA LEY 2/2002 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID)

1. INTRODUCCIÓN

Con la publicación de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, quedo derogada la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, a excepción del Título IV, «Evaluación ambiental de actividades», los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el Anexo V.

A partir de ese año, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, pasó a ser la única norma en la materia de aplicación en la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece en su disposición derogatoria única la derogación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, no obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

Por ello, con la publicación de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, por la que quedo derogada la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se exceptuaron de esta derogación, entre otros, el Título IV, «Evaluación ambiental de actividades», de competencia exclusivamente municipal, y el Anexo V, con objeto de cumplir con lo indicado en la disposición derogatoria única de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

2. FINES, OBJETIVOS, OPORTUNIDAD Y LEGALIDAD

2.1. FINES

Con esta propuesta se pretende la mejora técnica de determinados supuestos recogidos en el Anexo V de la Ley 2/2002, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, con objeto de mejorar técnicamente los casos y eliminar aquellos en los que no se considera necesaria la evaluación ambiental, lo que facilitará en ese campo las inversiones y la actividad económica.

2.2. OBJETIVOS

Con el paso del tiempo, se han venido detectando algunos vacíos legales en la aplicación del Anexo V de la Ley 2/2002, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, que se trata ahora de corregir.



Así, se propone una modificación de la redacción del epígrafe 11 del Anexo V, referido a la evaluación ambiental de actividades de competencia municipal, de la precitada Ley, cuya redacción actual es: instalaciones de tratamiento de superficies metálicas y materiales plásticos por procedimientos electrolíticos o químicos, cuando el volumen de las cubetas destinadas al tratamiento sea igual o inferior a 10 metros cúbicos

Debido a que actualmente las instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materiales plásticos por proceso electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 metros cúbicos está sometido a procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental, al encontrarse en el Anexo I de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, y las inferiores a 10 metros cúbicos, como se ha mencionado, a la evaluación ambiental de actividades establecida en la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, a las instalaciones entre 10 y 30 metros cúbicos no les resulta de aplicación ningún procedimiento ambiental, a pesar de ser instalaciones contaminantes.

Por otro lado, se propone la eliminación del epígrafe 6 del anexo V correspondiente a Industrias de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, no incluidas en otros epígrafes, a fin de conseguir una mayor claridad y simplificación administrativa debido a la mínima incidencia de estas industrias en la Comunidad de Madrid, existiendo una sola planta envasadora según datos de la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE) y, por otra parte, estar sometida a regulación estatal por el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.

Asimismo, se propone la eliminación del epígrafe 16 del mismo Anexo V, instalaciones base de telecomunicación que operen con radiofrecuencias, con objeto de conseguir una mayor claridad y simplificación administrativa, ya que las instalaciones de telecomunicaciones (antenas) son instalaciones que desde el punto de vista técnico-ambiental no generan un impacto ambiental significativo, y que, además, fuera de zonas urbanas no se encuentran sometidas a ningún procedimiento ambiental (salvo, en su caso, en espacios protegidos).

Con referencia al epígrafe 22 del mencionado anexo, Instalaciones en las que se realicen prácticas de embalsamamiento y tanatopraxia, se propone la eliminación del mismo ya que las instalaciones de este tipo vienen reguladas por los Decretos 2263/1974, de 20 de julio, y 124/1997, de 9 de octubre, por los que se aprueban los Reglamentos de Policía Sanitaria Mortuoria del Estado y de la Comunidad de Madrid, en los que se expone que las causas de mortalidad, los usos y costumbres en torno a la muerte, las formas de vida, el avance en técnicas constructivas, y el servicio que prestan las empresas funerarias han variado sensiblemente, por lo que alguno de los controles administrativo-sanitarios que se realizaban no tienen justificación ni por riesgos sanitarios, ni por una demanda de la sociedad. Por otra parte, en lo tocante a aspectos de calidad del aire o residuos, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la CAM, define la comprobación de las



instalaciones con carácter previo a la resolución de autorización de establecimiento de las mismas. Es, por lo tanto, otra propuesta en aras de acceder a una mejora de regulación normativa por simplificación de la misma sin incurrir en pérdida de legalidad o seguridad jurídica.

De la misma forma, con esta propuesta se pretende eliminar el epígrafe 23 del citado Anexo V, referente a *centros sanitarios asistenciales, extrahospitalarios, clínicas veterinarias, médicas, odontológicas y similares*. El impacto medioambiental que pueden producir los residuos generados en estos centros viene precedido por el establecimiento de los requisitos mínimos exigibles en la producción y gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos regulados en el Decreto 83/1999, de 3 de junio, cuyo ámbito objetivo es prevenir los riesgos que dichas actividades generan, tanto para las personas directamente expuestas a los residuos en dichos centros, como para el medio ambiente, ofreciendo esta normativa las garantías suficientes para su protección, siendo innecesaria la evaluación ambiental.

Por último, se propone la eliminación del epígrafe 24 del Anexo V, sobre *Laboratorios de análisis clínicos*, remitiéndonos igualmente al Decreto 83/1999, de 3 de junio, citado en el epígrafe anterior, así como al RD 2043/1994 sobre inspección y verificación de buenas prácticas de laboratorios, que regula la inspección y verificación de los sistemas de organización y de las condiciones de planificación, realización, registro y difusión de los estudios de laboratorios para ensayos no clínicos efectuados con fines reglamentarios, de productos farmacéuticos, cosméticos, aditivos alimentarios, aditivos para piensos, plaguicidas y demás productos químicos con el objeto de determinar sus efectos en las personas, los animales y minimizar la contaminación del medio ambiente, estableciendo órganos de control que determinen el grado de cumplimiento de la buenas prácticas en los laboratorios, prescindiendo, como en los epígrafes anteriores propuestos a eliminar, de la evaluación ambiental, con la consiguiente simplificación administrativa.

2.3. OPORTUNIDAD

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, de ámbito estatal y carácter básico, fue preciso llevar a cabo, con ocasión de la tramitación y aprobación de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, una derogación parcial de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, así como algunas revisiones de aquellos artículos que, quedando exceptuados de la derogación, era necesario adaptar por coherencia jurídica con la normativa básica. Como consecuencia de estos cambios normativos, fue preciso articular un régimen de transitoriedad mediante la Disposición Transitoria Primera, que establecía un régimen transitorio de aplicación en materia de evaluación de impacto ambiental que, se hace preciso revisar en lo concerniente a algunos extremos que se plantean a continuación.

2.4. LEGALIDAD DE LA NORMA

El artículo 149.1.23, de la Constitución Española, atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer la normativa básica en materia medio ambiente.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid atribuye, en el artículo 27.7, la competencia para el desarrollo legislativo en materia de protección del medio ambiente.



Por otro lado, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece en su disposición derogatoria única la derogación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, no obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas Comunidades y Ciudades Autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

Por ello, con la publicación de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, por la que quedó derogada la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se exceptuaron de esta derogación, entre otros, el Título IV, «Evaluación ambiental de actividades», de competencia exclusivamente municipal, y el Anexo V, con objeto de cumplir con lo indicado en la disposición derogatoria única de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Por lo tanto, esta propuesta se fundamenta en la habilitación estatutaria de la Comunidad de Madrid respetando los aspectos básicos de la legislación estatal, siendo esta labor absolutamente imprescindible para la aclaración del régimen vigente de la Ley 2/2002.

2.5. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS.

Únicamente se plantea como alternativa llevar a cabo las modificaciones propuestas, debido a que se trata de corregir las anomalías detectadas de los supuestos recogidos en el Anexo V de la Ley 2/2002

3. CONTENIDO DE LA NORMA

La Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental establece un régimen legal que afectó sustancialmente a la normativa autonómica entonces vigente, la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, dictada al amparo de la competencia que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid le atribuye en el artículo 27.7 para el desarrollo legislativo en materia de protección del medio ambiente.

A pesar de tratarse de legislación básica, el propio artículo 11 de la Ley estatal permite que las Comunidades Autónomas modifiquen este régimen, siempre y cuando se refieran a planes, programas o proyectos competencia de las mismas. Por esto, se hizo necesaria una reformulación de las competencias en la materia en el ámbito de la Comunidad de Madrid, incluyéndose a este efecto una Disposición Transitoria Primera en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Una de las motivaciones para esta reformulación fue la de garantizar la salvaguarda de valores ambientales fundamentales que, estando vinculados a proyectos que no eran tenidos en cuenta por la nueva legislación estatal, se consideró conveniente que si fueran contemplados por la legislación autonómica, entre ellos los referidos a la evaluación ambiental de actividades de competencia municipal, ya que la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece en su Disposición Derogatoria Única, la derogación del Reglamento de



Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, no obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas Comunidades y Ciudades Autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

Así, después de mantenerse la mencionada la evaluación ambiental de actividades, se han venido detectando algunos vacíos legales y algún exceso de regulación, que se trata ahora de corregir mediante la modificación de la redacción del epígrafe 11 y la supresión de los epígrafes 6, 16, 22, 23 y 24 del Anexo V de la Ley 2/2002, para lo que esta propuesta se considera imprescindible.

4. ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN

Esta propuesta se adecuará a los principios contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.

En particular, se cumplirán los principios de necesidad y eficacia, al considerarse que, con la mejora técnica de los supuestos recogidos en el Anexo V de la Ley 2/2002, de 19 de Junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, así como la eliminación de aquellos casos en los que no se considera necesaria la evaluación ambiental, regulados igualmente en el citado Anexo, se conseguiría una simplificación administrativa que facilitaría las inversiones y desarrollo de la actividad económica.

Así mismo, el principio de proporcionalidad se considerará cumplido, ya que la propuesta contendría la regulación imprescindible para atender a su finalidad.

El principio de seguridad jurídica se garantizaría, puesto que la propuesta es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y generaría un marco normativo que corregiría los vacíos legales y excesos de regulación existentes en la normativa en vigor.

El principio de transparencia igualmente se entendería garantizado, ya que se posibilitará el acceso a la normativa actual y a los documentos propios del proceso de elaboración de la propuesta.

Y, por último, cumpliría con la aplicación del principio de eficiencia, ya que esta propuesta no introduce cargas administrativas, adaptando igualmente las etapas del proceso de evaluación ambiental a los principios comunitarios de una mejor legislación.

5. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO COMPETENCIAL PREVALENTE

El Estatuto de Autonomía, en su artículo 27.7 establece que corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución en lo que respecta a la protección del medio ambiente.



6. LISTADO DE NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS

No se procede a la derogación de ninguna norma.

7. IMPACTO ECONÓMICO – PRESUPUESTARIO E IMPACTOS SOCIALES

7.1 IMPACTO ECONÓMICO – PRESUPUESTARIO

Del contenido del proyecto no se deriva incidencia directa sobre la economía general y no comporta gasto para la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

7.2. IMPACTOS SOCIALES

Respecto al impacto social de la propuesta se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

7.2.1. Impacto por razón de género

En el marco de los objetivos de la acción comunitaria prevista para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas estableció la obligatoriedad, en los procedimientos de elaboración de proyectos de ley y reglamentos, de incorporar un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en los mismos. Por ello se procede a solicitar informe a la Dirección General de Igualdad de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

7.2.2. Impacto sobre la infancia, adolescencia y la familia.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, modificadas por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia disponen que las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia. Por ello se procede a solicitar informe a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

7.2.3. Impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.

De conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBI-fobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid y el artículo 45 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, las disposiciones legales o reglamentarias de la Comunidad de Madrid deberán contar con carácter preceptivo con un informe sobre su impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. Por ello se procede a solicitar informe a la Dirección General de Igualdad de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.



8. OTROS IMPACTOS.

La norma no afecta a las cargas administrativas de la Comunidad de Madrid. La aplicación de esta norma es de exclusiva competencia municipal. Para estas Administraciones se reducen cargas, con la eliminación de los epígrafes 6, 16, 22, 23 y 24 del Anexo V y con la modificación del epígrafe 11 no se considera que pueda haber un aumento significativo de las cargas.

9. TRÁMITES E INFORMES A LOS QUE SE SOMETE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.

La propuesta de modificación se someterá a los siguientes trámites e informes:

- a) Consulta pública.
- b) Solicitud simultánea de informes preceptivos y otras consultas que se estimen convenientes.
- c) Trámite de audiencia e información públicas.

Se someterá a estos trámites de conformidad con lo dispuesto el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como del artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.

En particular, se someterá a trámite de audiencia dando traslado del proyecto normativo a las a las Entidades Locales y a la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid.

- d) Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería proponente.
- e) Informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid

EL DIRECTOR GENERAL DE DESCARBONIZACIÓN
Y TRANSICION ENERGETICA

Fdo.: Fernando Arlandis Pérez

